

La crisis económica y política en México

JOSE FERNANDEZ SANTILLAN

Dos magnas devaluaciones, dos descabros significativos en los proyectos de desarrollo: la devaluación de 1982 puso al descubierto las deficiencias del modelo basado en el intervencionismo estatal; la de diciembre pasado mostró los defectos de la pauta inspirada en el liberalismo económico. Estos dos fenómenos parecen seguir la secuencia — aunque con resultados distintos— que experimentaron los países del área occidental que se desarrollaron, en el tiempo que corren entre mediados de los años cuarenta y principios de los ochenta, dentro de los marcos del intervencionismo estatal para luego, en una etapa sucesiva y más reciente, moverse según los cánones del libre mercado.

Lo curioso es que a diferencia de muchos países —en los que el esquema del Estado asistencial fue llevado a efecto por partidos socialdemócratas, socialistas, demócratas y laboristas que fueron posteriormente desbancados por partidos democristianos, conservadores, liberales y republicanos quienes echaron abajo el Estado benefactor y aplicaron el monetarismo aquí en México el partido que llevó a efecto el intervencionismo es el mismo que lo desmanteló. Más aún, hoy tendríamos que decir, después del reciente desengaño, que el PRI es acaso el único instituto político en el mundo al que le han fallado tanto el intervencionismo como el neoliberalismo. Esta es la verdadera dimensión del problema en curso; una dimensión que se ubica en un plano más alto que el meramente coyuntural.

Veamos: El modelo intervencionista se apoyó en la institución presidencial y el partido oficial. Desde la década de los treinta ambos se comprometieron a llevar a cabo las reformas sociales. Así se elevó la figura del jefe del ejecutivo a imagen benefactora frente a las grandes masas reunidas en organizaciones que no contaron con un programa autónomo, sino que quedaron aglutinadas corporativamente dentro del partido oficial. De allí los rasgos paternalista y populista del régimen. Se pensó que dichas reformas sociales debían depender de la creciente intervención del Estado en la economía; cosa que incluyó, desde luego, el programa de nacionalizaciones. La columna vertebral de este diseño fue la llamada "alianza de clases", o sea, la convergencia entre el gobierno, las centrales de trabajadores y las agrupaciones empresariales en un solo proyecto nacional.

Hoy se olvida con facilidad, pero la clave del funcionamiento en México del modelo keynesiano fue el pacto histórico que estipularon esos tres sectores por medio del cual se comprometieron a desarrollar la economía nacional con bases internas de sustentación; garantizar la estabilidad política y la paz social, y aumentar los niveles de vida de los trabajadores. El apoyo se incrementó en la medida en que hubo una identificación entre las organizaciones sociales y el vértice político en torno a las reformas. A esta manera de captar el consenso se le conoce como "legitimidad por efectividad", vale decir, implantación de la educación gratuita, reparto agrario, legislación laboral, asistencia social, salud pública, garantías al inversionista, incentivos a la producción y creación de empleos.

Aunque hubo diferencias significativas entre los distintos gobiernos priistas que operaron entre 1940 y 1982, todos ellos coincidieron en el propósito intervencionista. Fueron años que arrojaron, en conjunto, una tendencia al crecimiento económico, a la estabilidad de precios, al aumento del aparato estatal. La hegemonía del PRI fue en contrastada; el verticalismo presidencial se acentuó; el llamado "milagro mexicano" era una realidad. Todo parecía ir viento en popa: tasas de crecimiento que llegaron en algunos años hasta el 8 por ciento, urbanización, surgimiento de una clase media muy consistente, prestigio internacional, un sector empresarial en ascenso, triunfos sucesivos en el ámbito electoral que sólo servían para refrendar el apoyo multitudinario a la línea gubernamental. Cada éxito era considerado como una "conquista de la revolución", vocablo utilizado por casi todos los mandatarios de ese periodo.

Pero el reformismo comenzó a debilitarse; síntoma inequívoco de que el empuje de la revolución languidecía. Bien se sabe que las reformas marcan los tiempos largos de las revoluciones; ellas, las reformas, no se mueven de manera autónoma, más bien responden al impulso inicial. Su disminución indica el debilitamiento de la causa eficiente.

La reducción del reformismo ya se había hecho patente al inicio de los años setenta. Lo que evidenció el fenómeno fue la disminución del ritmo del crecimiento económico y la merma de la capacidad de respuesta gubernamental, lo que también repercutió desfavorablemente en las bases consensuales. En el marco de la legitimidad por efectividad la desaceleración afectó al desarrollo y con ello también a los respaldos sociales; el pacto corporativo se erosionó.

Entró en escena el modelo neoliberal que revirtió el proceso de expansión estatal. Si en la época del intervencionismo se reformaba nacionalizando, luego, en la época del neoliberalismo, se reformó desnacionalizando o privatizando. Paradojas del reformismo oficial o, si se quiere, del pragmatismo. El crecimiento hacia adentro cedió ante la apertura comercial; los pocos equilibrios que se habían logrado fueron rotos para favorecer la concentración en todos los órdenes. Pero quizá lo más importante fue que el acuerdo corporativo —que tan buenos servicios le brindó al sistema— vino a menos: sobre todo ya no hubo compromiso en elevar los niveles de vida de la población, aunque se pidió que los apoyos políticos siguieran fluyendo. Era preciso que en momentos difíciles se mantuviera la unidad y las adhesiones para salir de lo que se calificaba tan solo como un bache. Eso fue lo que se hizo cuando la devaluación de 1982 puso al descubierto los efectos indeseados del modelo intervencionista: burocratismo, corrupción, ineficiencia, fuga de capitales, alto endeudamiento público, desconfianza, fracturas dentro de la élite política. No era sólo un pequeño escollo sino un problema mayor: un defecto básico en la edificación del país.

Entre 1982 y 1994 se implantó un esquema distinto: se favoreció al capital privado, se crearon mecanismos legales y financieros para atraer recursos del exterior, se establecieron acuerdos con los organismos financieros internacionales. Parecía que el cambio de estrategia había dado resultado: logros en materia macroeconómica, aprobación del Tratado de Libre Comercio que aparentemente nos ponía en la antesala del Primer mundo, estabilidad de precios, captación abundante de capital internacional, disciplina en las finanzas públicas, desarrollo de grandes proyectos empresariales, tendencial aumento de

los índices bursátiles, presencia de una élite que sustituyó en el mando a los viejos políticos. El contraste con la antigua estrategia estatista fue evidente y resaltado incluso en el discurso oficial.

En México, lo mismo que en otras partes del mundo, las críticas más fuertes al intervencionismo vinieron de la derecha neoliberal. A las características generales de esa tendencia, aquí se sumó la cancelación del programa de nacionalizaciones y la participación del Estado en la vida económica —según la famosa tesis de Robert Nozick acerca del "Estado mínimo". En términos ideológicos el neoliberalismo mexicano justificó su presencia con base en la crisis económica y el consecuente estado de necesidad. Pero el asunto resulta en extremo embarazoso si se le contempla desde otro mirador: no se explicó el motivo por el cual — aparte del consabido estado de necesidad— se dio un cambio tan radical en la manera de concebir la política y la economía: hay una tajante contraposición entre los principios de la revolución y los postulados de la doctrina del libre mercado.

No obstante, la estrategia desembocó en una desagradable sorpresa, sea por el llamado "error de diciembre" sea por defectos estructurales: vertiginosa salida de capitales, caída de las reservas monetarias, pérdida del poder adquisitivo, desempleo, inflación, desprestigio, franca irritación de amplios sectores de la población.

La coyuntura actual puede ser caracterizada como un momento en el que han entrado en crisis simultáneamente — hecho que no había sucedido antes dentro del régimen de la revolución— un modelo económico y un modelo político; empalme por demás peligroso. Ello mueve a la búsqueda de soluciones de gran envergadura para abrir una nueva etapa histórica. Considero que para fundar esa nueva etapa se requiere la estipulación de un pacto ya no corporativo sino de asociación (*pactum societatis*) con base en el cual los actores sociales y políticos se comprometan a crear un modelo de desarrollo económico que salga de la disyuntiva entre el estatismo y el monetarismo. En este sentido sería conveniente tomar en cuenta las más recientes propuestas del liberal socialismo.¹ El compromiso también debe darse en referencia al cambio de modelo político.

Es verdad que hay turbulencia en el ambiente producto de la nueva e inesperada crisis; asimismo es verdad que la acumulación de poder en unas cuantas familias representa un verdadero y propio "cuello de botella evolutivo"—para usar la frase de Danilo Zolo. Pero aquí se trata de ver más allá de esa turbulencia para aclarar los términos con base en los cuales queremos reconstruir el país. Podrán haber distintos puntos de vista acerca de la manera de llevar a cabo esa reconstrucción, pero creo que hay coincidencia en torno a puntos políticos y jurídicos fundamentales como: el Estado de derecho, el equilibrio de poderes, el federalismo, el fortalecimiento del sistema de partidos, la equidad en la competencia electoral.

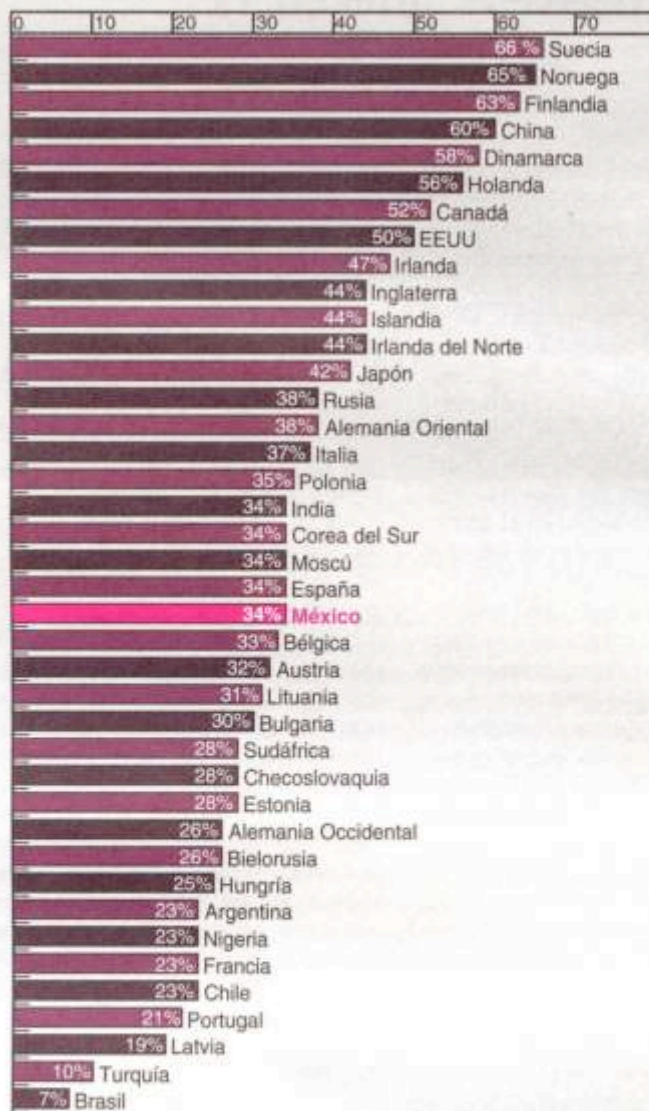
La reordenación económica y política del país es, sin duda, la tarea más urgente. Lo peor sería la continuación de este empalme problemático entre el agotamiento del modelo político y el estancamiento económico.

I M. Boyero, V. Mura, F. Sbarberi, (comp.) I dilemmi del liberalsocialismo, Nuova Italia Scientifica, Roma, 1994.

II Encuesta mundial de valores

II ENCUESTA MUNDIAL DE VALORES

Confianza en los demás



A la pregunta "En términos generales, ¿diría usted que se puede confiar en la mayoría de las personas o que no se puede ser tan confiado al tratar con la gente?" el 34% de los mexicanos contestaron que sí se puede confiar. Contrasta marcadamente con Turquía y Brasil con solo 10 y 7 por ciento de respuestas positivas, frente a Suecia y Noruega con un 66 y 65 por ciento, respectivamente. México ocupa claramente una posición intermedia.

La relevancia de esta pregunta es que la confianza en los demás, se ha mostrado con una fuerte relación con el comportamiento de la economía y de la política de los países.

Este año se está realizando la III Encuesta Mundial de Valores para analizar el curso que siguen comportamientos tan importantes como éste y compararlos con los datos de 1980 y 1990.

Vitrina Metodológica

Fecha de levantamiento: mayo de 1990; **Patrocinador:** Universidad de Michigan; **Responsable de la investigación:** CEOP/MORI de México; **Tipo de entrevista:** personal/domicilio; **Población entrevistada:** Nacional; **Tamaño de la muestra:** 1531 entrevistas; **Método de muestreo:** aleatorio por conglomerados; **Margen de error:** ± 2.5 ; **Confiabilidad estadística:** 95%; **Gráficas y comentarios:** Miguel Basáñez/Juan Balderas

MORI
DE MEXICO

